Crónica íntima del golpe militar uruguayo (I)

La muerte de un marino por los tupamaros desencadenó la guerra civil no declarada

Desde Montevideo, donde vive en la semiclandestinidad, Julio María Sanguinetti ha escrito la "Crónica íntima del golpe uruguayo" que **La Opinión** comienza a ofrecer hoy a sus lectores en exclusividad. Abogado y periodista, el autor ha ocupado asimismo altos cargos en las últimas administraciones uruguayas. Fue ministro de Industria y Comercio de Jorge Pacheco Areco y ministro de Educación y Cultura de Juan María Bordaberry. Electo por tres veces legislador, redactó, como constituyente, la actual Carta Magna de su país. Esta actuación pública le permitió conocer, en sus entretelones, el drama uruguayo. Lo que sigue, es una realidad que concita hoy la atención de toda América latina.

Escribe Julio María Sanguinetti

"La violencia es siempre eficaz, pero en general obtiene exactamente lo contrario de lo que se ha propuesto". LANZA DEL VASTO.

Entre sueños oí ruidos de disparos. Explosiones, tableteos de ametralladora. Eran las 7 de la mañana del 14 de abril de 1972 y, por lo que luego se verá, no es una fecha como para olvidarla. Mi mujer también se despertó y me dijo: "Son tiros". "No —le contesté con ánimo tranquilizador— creo que son explosiones de un motor". Minutos después me avisaban de Casa de Gobierno que un concertado ataque tupamaro había asesinado, en tres lugares distintos de la ciudad, al profesor. Armando Acosta y Lara, subsecretario del Interior y ex director interventor de Enseñanza Secundaria; al capitán de fragata Ernesto Motto; al subcomisario Oscar Dellega y al agente policial Juan C. Leites. Estos dos últimos habían sido emboscados en el cruce de las avenidas Rivera y Soca, a pocas cuadras de mi casa.

Salí derecho para la Casa de Gobierno. Las noticias eran impresionantes. Se trataba de operativos de ejecución al viejo estilo de las bandas de Chicago. Acosta y Lara había caído en la puerta de su casa, en pleno centro, en la calle San José, baleado desde tres ángulos diferentes por francotiradores apostados en una iglesia protestante, que habían copado previamente.

La respuesta era igualmente feroz. Miles de soldados y policías se habían lanzado a las calles de Montevideo a contragolpear a la organización guerrillera que había cometido —luego se comprobaría— uno de sus más graves errores.

A las 11 y media nos reunimos en el Consejo de Ministros, que por entonces yo integraba como titular de Educación y Cultura. Informó el general Magnani, ministro de Defensa, sobre la situación. Propuso declarar el estado de guerra interno y suspender las garantías individuales, solicitando al Parlamento la respectiva anuencia.

Llegan más noticias. A las 12.30 se produce un encuentro en el barrio del Cerrito de la Victoria: dos guerrilleros muertos, otro prisionero. Media hora después, en el Buceo, se produce un tiroteo al allanarse una finca y caen muertos cuatro tupamaros de significación: Jorge Candán Grajales, Gabriel Schroeder Orozco, Horacio Rovira Griego y Armando Hugo Katras. Al mismo tiempo, en la calle Amazonas, en Malvín, en su casa, son muertos —al resistirse al allanamiento el escribano Luis Martirena y su mujer, tesoreros del movimiento sedicioso; cae herido Eleuterio F. Huidobro y detenido un cuarto, el contador David Alberto Cámpora.

En la mañana del 15 de abril se entierra a los muertos.

Es la primera vez que la organización revolucionaria ha atentado contra un oficial, en este caso un marino, y contra un político. Las Fuerzas Armadas se duelen de una herida en carne propia. El momento, tantas veces previsto, tantas veces tema de las charlas en los casinos de oficiales ("distinto será el día en que ataquen a uno de nosotros") había llegado.

La Plaza Independencia, en el centro de Montevideo, se repleta con miles de ciudadanos. Habían existido dudas sobre si darle o no carácter oficial al sepelio. Algunas opiniones, conservadoras, temían que el público, por la tensión imperante no acompañara; algunas otras, con argumentos moralistas, decían que debía renunciarse a aprovechar políticamente a los caídos. El ministro del Interior, Rovira, había insistido, sin embargo, en que había que lanzar la gente a la calle.

La multitud caminó detrás de los ataúdes hasta el cementerio. Allí, dije un discurso. Llevaba algo escrito, pero por la mitad abandoné los papeles y hablé improvisadamente. La gente estalló en una ovación, que resonó extrañamente en el ambiente solemne y recogido del viejo cementerio. Cientos de oficiales lo poblaban con sus uniformes.

Comenzaba allí un largo proceso. Aún no ha terminado.

Por supuesto, mucho había quedado ya atrás. El lejano secuestro de Ulises Pereyra Reverbel, presidente de las Usinas y Teléfonos del Estado, amigo personal del entonces presidente Pacheco Areco, el 7 de agosto de 1958, secuestrado por segunda vez el 30 de marzo de 1971. El secuestro del banquero italiano y editor periodístico Gaetano Pellegrini Giampietro, el 9 de setiembre de 1969; el del juez Daniel Pereira Manelli, el 4 de agosto de 1970, pieza clave en el sometimiento sicológico de la justicia; el del asesor policial norteamericano Dan Anthony Mitrione, raptado el 31 de julio de 1970 y asesinado el 10 de agosto cuando el gobierno rechazó una propuesta de canje (1) el del cónsul brasileño Aloysio Dias Gomide el 21 de febrero de 1972; el del experto agrario norteamericano Claude Fly, el mismo día de Mitrione; el del embajador de Gran Bretaña, Sir Geoffrey Jackson, el 8 de enero de 1971, puesto en libertad en setiembre, al iniciarse la campaña preelectoral que llevó a Bordaberry al poder; el de Guido Berro Oribe, fiscal de Corte, el 10 de marzo de 1971; el del industrial Ricardo Ferrés Terra, el 13 de abril de 1972; el del ex ministro y banquero Carlos Frick Davie; el del fotógrafo policial Nelson Bardesio; el de Homero Fariña, redactor responsable del diario **Acción**.

Es, por cierto, una larga historia. Extraño caleidoscopio de secuestros, robos, asaltos, allanamientos, muertos, heridos. Hasta que llegamos a ese 14 de abril en que la guerrilla, por vez primera, golpea en lo íntimo de los institutos armados.

La guerra ha comenzado:

Formal, jurídicamente, desde el 9 de setiembre se había sometido la lucha a los militares, cuando el entonces presidente Pacheco Areco, al día siguiente de la gran fuga del penal de Punta Carretas, en que se evadieron 112 tupamaros, tuvo que reconocer la total derrota policial y pasar toda el problema a la órbita militar. Luego había venido la campaña preelectoral y de hecho una tregua, que tácitamente concedieron los tupamaros para contribuir a un comicio en que aparecía una fuerza que por primera vez coaligaba a todos los sectores de izquierda, ofreciéndoles perspectivas hasta entonces nunca vislumbradas. La elección dio el triunfo al Partido Colorado, oficialista con el 41% de los votos, seguido de cerca por el Partido Nacional, con el 40,2% y tercero el Frente Amplio, con el 18.3%. La izquierda había avanzado algo, es cierto, pero el camino electoral una vez más aparecía para ella lejano, inalcanzable.

Después de la elección, como siempre en el Uruguay, el verano había actuado como un soleado sedante.

Instalado el nuevo gobierno el 1º de marzo, en abril se desató la avalancha. El 12 se produce una nueva fuga del penal, encabezada ahora por Héctor Amodio Pérez, fundador del movimiento tupamaro y figura clave en su caída cuando aportó al ejército los datos fundamentales que condujeron a la destrucción del aparato guerrillero. Y el 14, la reacción frontal.

Por primera vez desde la última guerra civil, en 1904, el ejército uruguayo vive el clima de la guerra, su real conciencia, la que sólo crea la sangre. Ahora se combate casa por casa, calle por calle, contra un enemigo escondido que aparece y reaparece como un fantasma en las sombras de una ciudad de un millón largo de habitantes, extendida a lo largo del río de la Plata y enlazada por un cinturón de barrios y pequeños balnearios, que ofrecen el bosque protector del guerrillero urbano.

(1) Este episodio dio argumento a la película "Estado de Sitio", que dirigiera Costa-Gravas, con la actuación protagónica de Ives Montand, en el papel del asesor norteamericano acusado por los tupamaros de haber introducido los métodos de tortura en la policía uruguaya.

Próxima nota: Un ejército encuentra a sus jefes.

Copyright **La Opinión** 1973.